

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**



**SALA LABORAL**

**SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL**

DEMANDANTE	Elkin Mario Cardona Granada
DEMANDADA	i) Empresa Para La Seguridad Urbana “ESU” ii) Municipio de Medellín
RADICADO UNICO NACIONAL	05001-31-05-019-2014-01222-02
TIPO DE PROCESO	Ordinario laboral
DECISIÓN	Modifica
ACTA DE DECISIÓN	335 de 2022

Medellín, diecinueve (19) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

La **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por los Magistrados Jaime Alberto Aristizábal Gómez, quien funge como ponente, John Jairo Acosta Pérez y Francisco Arango Torres, procede a resolver el recurso de apelación presentado por el apoderado de la parte demandada, contra el auto del 22 de noviembre de 2022, que liquidó y aprobó la liquidación de costas, en el proceso de la referencia.

A continuación, se toma la decisión correspondiente, previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

## **ANTECEDENTES**

En auto del 22 de noviembre de 2022, se liquidaron las costas en favor del demandante y cargo de la Empresa para la Seguridad Urbana ESU, fijándose como agencias en derecho en primera instancia la suma de \$2.261.753, y en la segunda instancia la suma de \$1.772.170 a cargo de dicha entidad, y \$1.772.170 a cargo del Municipio de Medellín.

## **RECURSO DE APELACIÓN**

El apoderado de la parte demandante presentó recurso de reposición y en subsidio apelación, indicando que las condenas del proceso equivalen a \$15.078.351, más \$163.953.645 por indemnización moratoria liquidada al 15 de noviembre de 2022, para un total de \$179.031.996, al que aplicado el 25% arroja por costas la suma de \$44.757.999, conforme al Acuerdo 1887 de 2003, por lo que considera que la suma fijada resulta precaria frente al valor de las condenas y la gestión realizada.

En auto del 1 de diciembre de 2022 no se repuso la decisión y se concedió el recurso de apelación.

Preliminarmente se hace necesario exponer que, corrido el traslado para alegar, ninguna de las partes presentó alegaciones ante esta instancia.

## **PROBLEMA JURÍDICO**

Consiste en determinar cuáles la normatividad aplicable en el presente caso para la fijación de agencias en derecho, y si el valor fijado en primera instancia se encuentra acorde con los parámetros establecidos por el Honorable Consejo Superior de la Judicatura.

## **CONSIDERACIONES**

El análisis versará sobre lo que fue objeto de recurso conforme a lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 712 de 2001 que alude al principio de la consonancia, en virtud del cual la actividad de la segunda instancia se restringe a los puntos concretos de inconformidad.

El numeral 4 del artículo 366 del Código General del Proceso prescribe:

“4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas.”

Conforme a dicha norma, para la fijación de las agencias en derecho el Juez debe aplicar las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura y tener en cuenta las circunstancias especiales que allí se señalan.

Según lo dispuesto en el Acuerdo 1887 de 2003 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura – aplicable al presente asunto en

virtud de la transición prevista en el artículo 7° del Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016-, las agencias en derecho a favor del trabajador, en los procesos ordinarios laborales de primera instancia, se tasan de la siguiente manera:

**“2.1.1. A favor del trabajador:**

(...)

Primera instancia.	Hasta el veinticinco por ciento (25%) del valor de las pretensiones reconocidas en la sentencia. Si ésta, además, reconoce obligaciones de hacer, se incrementará hasta cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes por este concepto.
--------------------	---

En los casos en que únicamente se ordene o niegue el cumplimiento de obligaciones de hacer, hasta cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

(...)

**PARÁGRAFO.** Si la sentencia reconoce prestaciones periódicas, hasta veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes.”

Según dicho precepto nortmativo, se establece el valor de las agencias en derecho como topes hasta los cuales se pueden fijar las mismas, dependiendo de cada caso, no una tarifa única, sino un rango dentro del cual se puede mover el operador jurídico para determinar el valor de las agencias, teniendo en cuenta para ello la naturaleza, calidad y duración útil de la gestión ejecutada por el apoderado o la parte que litigó, la cuantía de las pretensiones y las demás circunstancias relevantes, de modo que sean equitativas y razonables.

Así, sobre la suma obtenida, el Funcionario Judicial puede aplicar hasta el 25% de las pretensiones reconocidas, conforme a lo dispuesto en el artículo 6° del Acuerdo 1883 de 2003, debiéndose tener en cuenta que

cuando se trata de tarifas por porcentaje, éstas se deben aplicar en forma inversamente proporcional.

De ahí que, al momento de la fijación de las agencias en derecho en el caso concreto, es preciso tener en cuenta varias situaciones como las siguientes: i) la naturaleza, de relativa complejidad del debate jurídico que se planteó en el presente proceso, esto es, la existencia de una relación laboral, junto con el pago de prestaciones sociales e indemnizaciones entre otros; ii) la duración del proceso, por cuanto transcurrieron más de ocho (8) años para su resolución, ya que la demanda fue presentada el 5 de septiembre de 2014 y la sentencia de fondo en segunda instancia se profirió el 6 de octubre de 2022; y iii) la calidad de la actuación del profesional del derecho, quien impulsó las etapas previas, participó en las audiencias públicas en la primera instancia e interpuso los recursos correspondientes, llevando al reconocimiento de la mayoría de las pretensiones de la demanda.

Atendiendo a las anteriores situaciones, efectivamente la suma de **\$2.261.753** dispuesta como agencias en derecho en primera instancia se queda corta con respecto a las pretensiones reconocidas al demandante por prestaciones sociales e indemnización moratoria.

Ahora, no se puede desconocer que la solicitud que presenta el recurrente tampoco puede ser de recibo en la medida que pretende un cálculo aplicando el porcentaje máximo establecido en el acuerdo que regula la materia, más aún cuando otras pretensiones como el reembolso de los dineros retenidos por concepto de rete fuente, subsidio familiar, entre otras, no fueron reconocidas.

Además, como se ha explicado en reiteradas oportunidades, el porcentaje de 25% allí establecido, así como la suma equivalente a 20

SMLMV cuando la condena incluya una prestación periódica, o de 4 de estos cuando se trate de una obligación de hacer, corresponden al límite máximo que en cada uno de los casos puede aplicar el operador, sin que ese porcentaje o valor sea de obligatorio cumplimiento, más aún, se reitera, cuando para cada caso se debe tener en cuenta la naturaleza del proceso, las órdenes impartidas y la actividad desplegada por el profesional del derecho.

Adicionalmente, el propio acuerdo 1883 de 2003 es claro en establecer que los porcentajes allí establecidos se deben aplicar inversamente al valor de las pretensiones, lo que significa que ante una condena cuantiosa lo prudente es aplicar un porcentaje inferior.

Dado lo anterior, estima la Sala procedente, teniendo en cuenta las circunstancias propias del proceso, MODIFICAR las agencias en derecho para el trámite de la primera instancia, y fijar el valor de **\$14.806.090**. Monto que está acorde con los parámetros fijados en el acuerdo 1887 de 2003 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, norma aplicable en el presente caso dada la fecha de presentación de la demanda.

Sin costas en esta instancia al ser improcedente, en tanto lo acá resuelto es precisamente la apelación frente al auto que liquida costas y agencias en derecho en primera instancia.

En mérito de lo expuesto, la **Sala primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín,**

**RESUELVE**

**PRIMERO: MODIFICAR** el monto de las agencias en derecho, fijando por este concepto en la primera instancia, la suma de \$14.806.090, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

**SEGUNDO:** sin costas en esta instancia.

Lo resuelto se notifica en **ESTADOS**. Se ordena regresar el expediente al Juzgado de origen.

Los Magistrados,

Jaime Alberto Aristizábal Gómez

John Jairo Acosta Pérez

Francisco Arango Torres

**EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL  
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA LABORAL  
- HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados  
No 001 de enero 11 de 2023

consultable aquí:  
<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/147>

**Firmado Por:**

**Jaime Alberto Aristizabal Gomez**  
**Magistrado**  
**Sala Laboral**  
**Tribunal Superior De Medellin - Antioquia**

**John Jairo Acosta Perez**  
**Magistrado**  
**Sala Laboral**  
**Tribunal Superior De Medellin - Antioquia**

**Francisco Arango Torres**  
**Magistrado**  
**Sala Laboral**  
**Tribunal Superior De Medellin - Antioquia**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **2aaa97eb8b0dd10d19e74be0df3eff2aaed6034cf52a8182fd09e2c17afc9c5f**

Documento generado en 19/12/2022 01:08:00 PM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**  
**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**